

LA UNIVERSIDAD, EN UNA POLÍTICA QUE NO SE ENTIENDE



Por Rubén Torres

Las tres décadas desde la recuperación democrática estuvieron teñidas de frivolidad, como la ilusión de la convertibilidad, un interregno de tragedia y esperanza, 12 años de dilapidación de recursos y un gobierno de pensamiento ilusorio de que las cosas ocurren sólo por el hecho de imaginarlas.

El Estado acaba de gastar casi 4000 millones en una encuesta para conocer a los candidatos mejor posicionados y 33 millones de argentinos fueron obligados a votar internas de partidos de existencia irreal, a los que ni siquiera están afiliados (hay 8,3 millones de afiliados, en la Cámara Federal electoral, la mitad de los cuales se encuentran en Corrientes, Jujuy y Formosa).

En un año electoral, el Estado entrega unos 18 millones de pesos para imprimir boletas. Un partido con aspiraciones necesita más dinero para pagar las imprentas, pero a un partido sin aspiraciones le alcanza con 7 millones, es decir, se queda con 11 millones.

El Estado distribuye otros 85 millones entre los partidos: la mitad se divide por partes iguales entre todas las fuerzas (unos 5 millones para cada partido), y la otra mitad se distribuye en proporción a los votos de la elección anterior; así, un partido "quiosco"¹ en un año de comicios, puede reportarle al "dueño" unos 16 millones de pesos.

Pero, seguimos sin pensar en un modelo de desarrollo; y es difícil definir el tipo de universidad necesario para un proyecto de país que no existe. Huérfanos de ideas y anclados en el pasado continuamos festejando conquistas de hace un siglo, los Premio Nobel que ya fueron o que alguna Universidad encuentra un lugar más o menos decoroso en los caprichos de los rankings universitarios.

Crecimiento a la deriva

La modernidad es algo que ocurre lejos de casa. Desde 1989, se abrieron en el país 80 universidades y se duplicó

la cantidad de alumnos. Este crecimiento del sistema de educación superior obliga a pensar las instituciones y graduados que necesitamos, que no puede dejarse librada ni a las fuerzas del mercado ni a los deseos individuales de los estudiantes.


El libre ingreso a la carrera que quiero, en la universidad que se me antoja y tomándome todo el tiempo del mundo para graduarme, puede resultar democrático desde una mirada teórica, pero es poco objetiva si queremos salir del atraso.

El impacto de la educación trasciende lo individual. No es lo mismo en términos de desarrollo formar un martillero público que un ingeniero en petróleo, y el Estado debe coordinar el tipo de recurso humano que el país requiere para desarrollarse, ya que invierte mensualmente \$100.000 por cada alumno graduado.

Una de las claves de éxito de los países de desarrollo reciente ha sido pensar un modelo y luego promover las carreras que lo acompañan. Casi la mitad de los graduados en China lo es en carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemática), en Argentina sólo uno de cada cinco estudiantes se encuentra cursando una de ellas.

Corea del Sur gradúa cada año 28 ingenieros por 10.000 habitantes, Japón 13 y Argentina sólo dos. Cualquier país que gradúe 16 abogados por cada matemático, físico o químico, sumados, como la Argentina, está condenado al fracaso.

Los políticos no se atreven a resolver problemas difíciles, pero muchos lo son porque no se atreven a resolverlos: cada dos años se dedican cinco meses anuales (40%) para elecciones, no se discute la cantidad adecuada de legisladores y cuál debería ser su estructura administrativa, y se sigue afirmando riesgosa y desaprensivamente que la universidad pública es gratuita.

Dicen que los ciudadanos se desentienden de la política, pero cuando ella se transforma en una mera competencia por ocupar lugares, resulta claro que nadie puede interesarse por algo sin principios y que no se entiende. 

CUALQUIER PAÍS QUE GRADÚE 16 ABOGADOS POR CADA MATEMÁTICO, FÍSICO O QUÍMICO, SUMADOS, COMO LA ARGENTINA, ESTÁ CONDENADO AL FRACASO

¹ Un partido se conforma con la presentación de cuatro afiliados por cada mil del padrón del distrito hasta un máximo de un millón de ciudadanos: en una provincia como Buenos Aires, con cerca de 14 millones de personas en condiciones de votar, se necesitan solo 4000 ciudadanos que, con su nombre, dirección y firma sean afiliados de por vida; y con personería en cinco distritos se puede presentar candidato a Presidente.